

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de junio de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

**I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN. -**

**PRIMERO:** Que la demandante justifica el recurso de casación en la forma en la causal del 5º, del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido pronunciada la sentencia definitiva con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170, determinadamente, del 4º, 5º y 6º del citado cuerpo legal, en relación a los numerales 5, 8 y 11, todos del Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema, de 30 de septiembre de 1920, sobre forma de las sentencias.

Indicó, en primer lugar, que el numeral 4º del referido artículo 170, en relación a la causal 5º del 768, es decir, por omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, en cuanto es obligación de la sentenciadora establecer con precisión los hechos sobre la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos sobre los que haya versado la discusión. Enseguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, la sentencia debe referirse en lo relativo a los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en su caso, la apreciación correspondiente de la prueba rendida en autos conforme a las reglas legales.

Señaló que también, si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos para los fines correspondientes (numeral 4º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y 5º, 6º y 7º Auto Acordado antes mencionado).

**SEGUNDO:** Que, en su opinión, en lo referente al vicio de falta de consideraciones puede deducirse, de la exposición que hace el



recurrente, que éste se configuraría en los siguientes aspectos a saber:

Porque en la sentencia de primera instancia no fue considerada la responsabilidad del banco, como consecuencia de los actos dolosos de terceros (Considerando 14º), de acuerdo con lo que fue razonado en ese considerando, en cuanto a tener por acreditado la:

- Existencia de contrato de compraventa e hipoteca autorizado en la notaría de don Cosme Fernando Gomila Gatica, repertorio n° 9916-2013, celebrado con fecha 28 de agosto de 2013 entre Silva Hermanos Limitada, Sociedad Electrónica Balrich S.A.C. y Banco Santander-Chile, mediante el cual, don Agustín Alberto Baldrich Casamiquela en representación de Sociedad Electrónica Balrich S.A.C., vendió, cedió y transfirió a don Clodomiro Justo Silva Núñez, quien compró, aceptó y adquirió para su representada, Silva Hermanos Limitada, el inmueble de propiedad de Sociedad Electrónica Balrich S.A.C. ubicado en calle Fresia número 9.340, que corresponde al lote número 9 del plano de subdivisión del lote número 2 de la parcela número 6 del proyecto de parcelación “San Ignacio”, comuna de Quilicura, región Metropolitana, a cambio de un precio ascendente a la suma de \$500.000.000, que el comprador pagó al vendedor en dicho acto al contado y que la parte vendedora declaró recibir a su total y entera satisfacción

- Sentencia penal en causa RIT 2670-2014, RUC 1410004134-1 de condena del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que establece como hechos bases: “Durante el mes de junio del año 2013, una corredora de propiedades no individualizada se contactó con la víctima don Clodomiro Justo Silva Núñez, representante legal de la Sociedad Silva Hermanos Limitada, y le ofreció la venta del inmueble ubicado en Fresia N° 9340, lote N° 9 del plano de subdivisión del lote N° 2 de la parcela N° 6, comuna de Quilicura, de propiedad de la Sociedad Electrónica Baidrich S.A.C. Luego, de analizar la conveniencia del negocio y las posibilidades de



financiamiento, Clodomiro Justo Silva Núñez accede a comprar el inmueble señalado a un valor de \$500.000.000 de pesos. En ese contexto, el día 28 de agosto de 2013, Clodomiro Justo Silva Núñez, en representación de la Sociedad Silva Hermanos Limitada, y el Imputado Carlos Antonio Morales Quintana, simulando ser Agustín Alberto Baldrich Casamiquela, representante legal de la Sociedad Electrónica Baldrich S.A.C., firmaron en las oficinas del Notario Público Cosme Fernando Gomila Gatica, Escritura Pública de Compraventa repertorio N° 9.916/2013 sobre el inmueble de calle Fresia N° 9340, lote N° 9 del plano de subdivisión del lote N° 2 de la parcela N° 6, comuna de Quilicura, por un precio de \$500.000.000 de pesos. Para el pago del precio, se entregó el vale vista N° 0012135 tomado en el Banco Santander por Sociedad Silva Hermanos limitada por la suma de \$363.553.489 de pesos bajo instrucciones notariales N° 972/2013, y el vale vista N° 0012153 tomado en el Banco Santander por Clodomiro Justo Silva Núñez por la suma de \$136.446.511 de pesos bajo instrucciones notariales N° 1003/2013, documentos que debían ser entregados al supuesto vendedor al momento de exhibirle las copias autorizadas del Certificado de Inscripción del Inmueble y Certificados de Hipotecas y Gravámenes en el Conservador de Bienes Raíces. El imputado Morales Quintana pudo celebrar dicho contrato de compraventa por medio de la presentación de una cédula de Identidad adulterada en la que simulaba ser Agustín Alberto Baldrich Casamiquela y un acta de junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad Electrónica Balcklch S.A.C., donde se faculta a Agustín Alberto Baldrich Casamiquela la enajenación del Inmueble ubicado en Fresia N° 9340, lote N° 9 del plano de subdivisión del lote N° 2 de la parcela N° 6, comuna de Quilicura. Con posterioridad, el Imputado Juan Alejandro Moyano Moyano concertado con Morales Quintana, concurrió a la Notaría de Cosme Fernando Gomila Gatica, presentando copia de Inscripción N° 93319, Certificado de Hipotecas y Gravámenes y Mandato General falso bajo el repertorio N° 3654 de fecha 29 de agosto de 2013, mediante el cual Agustín Alberto Baldrich



Casaquimela en su calidad de representante legal de la Sociedad Electrónica Baldrich S.A.C. le confiere amplios poderes, retirando, de este modo, los vale vistas N° 0012135 y N° 0012153 entregados para el pago del precio de la compraventa antes señalada. Con fecha 23 de septiembre de 2013 el Imputado Juan Alejandro Moyano Moyano concurrió a la sucursal Casa Matriz del Banco Santander y cobró por caja el vale vista N° 0012135 tomado por Sociedad Silva Hermanos Limitada por la suma de \$363.553.489 de pesos. Luego, el día 26 de septiembre de 2013, el imputado Juan Alejandro Moyano Moyano concurrió a la misma sucursal y cobró por caja el vale vista N° 0012153 tomado por Clodomiro Justo Silva Núñez por la suma de \$136.446.511 de pesos. Posteriormente, Sociedad Electrónica Baldrich S.A.C. se percató que el inmueble de su propiedad ubicado en Fresia N° 9340, lote N° 9 del plano de subdivisión del lote N° 2 de la parcela N° 6, comuna de Quilicura, había sido transferido a la Sociedad Silva Hermanos limitada, sin tener ellos conocimiento ni participación en el negocio, por lo que iniciaron las acciones legales correspondientes y lograron la nulidad de la enajenación. De esta forma, Sociedad Silva Hermanos Limitada y Clodomiro Justo Silva Núñez sufrieron un perjuicio ascendiente a la suma de \$500.000.000 pesos”.

- Vale Vista a la Orden N° 0012135 y N° 0012153 que se guardaron en custodia por el notario Cosme Fernando Gomila Gatica.

- La sentencia firme o ejecutoriada dictada por el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago con fecha 29 de enero de 2016, en causa rol C16.854-2013, caratulada “Sociedad Electrónica Baldrichsac con Silva Hermanos Ltda.”, la cual acoge la demanda de nulidad de los actos y contratos, accionó reivindicatoria, con indemnización de perjuicios, interpuesta por Sociedad Electrónica Baldrich S.A.C. en contra de Sociedad Silva Hermanos Limitada, Banco Santander Chile S.A., don Cosme Fernando Gomila Gatica, don Raúl Iván Perry Pefaur y don Luis Poza Maldonado, en cuanto declara la nulidad absoluta de los siguientes actos y contratos: a.1.- Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de julio de 2013, y su



reducción a Escritura Pública, de fecha 31 de julio de 2013, en la Notaria de don Raúl Perry Pefaur. A consecuencia de ello, deja sin efecto la referida escritura y el repertorio en que ésta se inscribió N° 37219. Deja, asimismo, sin efecto todas las demás subinscripciones que se hayan hecho de esta escritura, en el Registro de Comercio.

a.2.- Escritura de Mandato General, de fecha 29 de agosto de 2013, mediante la cual se confirió poder general a don Alejandro Moyano Moyano y el competente repertorio en que ésta se inscribió N° 3654-2013, ambos de la Notaría de don Luis Poza Maldonado.

a.3.- Escritura de Compraventa, Hipoteca y Prohibición Voluntaria de Gravar y Enajenar de fecha 28 de agosto de 2013, otorgada ante el Notario de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, y de su competente repertorio N° 9916- 2013, en que la Sociedad Electrónica Baldrich S.A.C. vendió, cedió y transfirió a Sociedad Silva Hermanos Limitada, quien compró, aceptó y adquirió para sí el inmueble de calle Fresia N° 9340, que corresponde al Lote número Nueve del plano de subdivisión del Lote Número Dos de la parcela número seis del proyecto de parcelación “San Ignacio” Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

a.4.- Deja sin efecto las convenciones contenidas en la escritura referida en el número anterior, entre Banco Santander Chile y Sociedad Silva Hermanos Limitada, tales como Hipoteca y Prohibición de Gravar y Enajenar, las que en virtud de lo expuesto en el considerando undécimo se ordena cancelar.

**TERCERO:** Que, según la recurrente la sentencia también debió analizar y no lo hizo, los antecedentes probatorios consistentes en:

1) La instrucción notarial al notario Gomila Gatica, redactada por el Banco Santander acerca de los Vale Vistas a la Orden N° 0012135 y N° 0012153 sen relación al pago del precio de la compraventa del bien raíz de calle Fresia de Quilicura.

2) El pagaré suscrito por la demandante a fin de facilitar la operación financiera para pagar el crédito de compra de ese bien raíz.



3) La escritura pública de compraventa del bien raíz, de calle Fresia, comuna de Quilicura.

4) La declaración de testigo Benjamín Alarcón Silva que señaló no recordar pero que la operación se financió con un crédito, lo que sabe en su calidad ejecutivo del banco demandado a cargo de la compraventa y que, determinadamente, la operación fue un porcentaje del crédito destinado al pago de parte de la compraventa.

**CUARTO:** Que, sostiene el recurrente que la sentencia no fue extendida en la forma que ordena el artículo 170, por no contener considerandos de hecho y de derecho, atendida la falta de fundamentación de la sentencia y la falta de decisión sobre la acción indemnizatoria fundada en el inciso 2° del artículo 1458 del Código Civil, deviene indefectiblemente en un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo. En efecto -alegó el apoderado de la parte demandante- la sentencia dejó a sus representados en la más absoluta incertidumbre sobre un derecho legítimo hecho valer en juicio, al no existir motivación alguna en el fallo relativa a la mentada acción resarcitoria y mucho menos, decisión sobre el respecto, de manera que no existe otra forma de remediar tal defecto formal, si no es mediante el acogimiento del recurso de casación, ya que sólo la invalidación del fallo permitirá se complete la sentencia en aquella parte no fundamentada y decidida, de manera que su parte tenga un completo pronunciamiento sobre sus acciones hechas valer en juicio.

**QUINTO:** Que, para la adecuada solución del recurso, si se entendiera que la actora se dirigió en contra del banco demandado por haber éste obtenido un provecho del actuar doloso del tercero y, por consiguiente, la acción deducida en autos tendría un carácter indemnizatorio, derivada de la responsabilidad extracontractual, según lo dispuesto en por el artículo 2316, no cabe duda que la acción debería haberse circunscrito a la limitación legal que tendría el banco al haber obtenido un beneficio del dolo ajeno, conforme al principio de que todo aquel que ha recibido un daño debe ser reparado íntegramente.



En tales circunstancias el banco beneficiado habría quedado sujeto a indemnizar el "quantum" de los perjuicios sufridos por la actora por el dolo, limitado al monto del provecho que de éste habría obtenido.

**SEXTO:** Que, cabe tener presente que la demanda menciona sucintamente que la comisión de un delito doloso o fraudulento cometido por un tercero no libera de responsabilidad al banco demandado, refiriéndose al inciso segundo del artículo 1458, como propio del estatuto de la responsabilidad contractual, y al artículo 2316, como perteneciente estatuto de la responsabilidad extracontractual, sin embargo, la sentencia se justifica con las razones exactas y precisas respecto a la acción de la actora, en la que el incumplimiento que la empresa demandante le atribuye al banco demandado, lo efectúa en relación a un contrato de mandato que éste habría infringido y a otro de depósito, por haber el banco pagado a un tercero y no a la supuesta vendedora, los vales vista que le fueron presentados al cobro.

**SÉPTIMO:** Que, en efecto, basta de la simple lectura de los fundamentos décimo sexto al vigésimo séptimo del fallo de primera instancia, para advertir que la sentenciadora al no tener por acreditado el incumplimiento contractual en que se funda la pretensión del actor, desestimó la demanda de indemnización de perjuicios, siendo innecesario pronunciarse sobre los demás elementos de la responsabilidad contractual alegada .Y según puede advertirse, el análisis y conclusión de que se trata no importó una afirmación de la sentenciadora que, por un primer aspecto, carezca de fundamentación como lo expresa el arbitrio en estudio, al arribar a una conclusión adecuada, apreciando los antecedentes probatorios que el mismo fallo señala y, por un segundo orden de cosas, atendidas tales consideraciones, queda también sin apoyo la circunstancia que propone el recurso, de no consignar la sentencia impugnada las consideraciones de hecho y de derecho, en relación con la prueba señalada en el arbitrio, pues como consta de autos, lo que se ataca



por este recurso de casación formal es la apreciación que del conjunto de probanzas, aludidas en el fallo, hace la juez de la instancia.

En suma, el arbitrio de casación no podrá prosperar, toda vez, que no se configura el vicio de nulidad que se invoca, dado que la supuesta acción sobre la cual se alega haber omitido pronunciamiento por parte de la juzgadora, no se ejerció en la especie; ni siquiera se indicó a cuánto habría constituido el provecho del banco demandado.

**OCTAVO:** Que, por consiguiente, al no adolecer la sentencia impugnada de los vicios de forma que le atribuye el recurso, como se deja claro en las consideraciones anteriores, este debe ser rechazado.

## **II.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN:**

**NOVENO:** Que el apoderado de la parte demandante refirió que la sentencia omitió toda consideración y decisión sobre la acción señalada, no obstante haberse ventilado en la demanda, haber sido controvertido de contrario y haberse rendido prueba sobre el particular. Así, la acción contemplada el inciso segundo del artículo 1458 del Código Civil, tuvo por fundamento el beneficio o provecho que al banco demandado le significó la ejecución de los actos delictivos y defraudatorios, cometidos por terceros, en perjuicio de sus representados. Tales actos dolosos, así como el perjuicio sufrido por la sociedad Silva Hermanos Limitada con motivo u ocasión de los mismos, quedaron completamente asentados en el considerando décimo cuarto, numeral segundo, del fallo impugnado, al establecerse así en una sentencia criminal con carácter de firme y ejecutoriada. No obstante, esto último, la sentencia no contiene ninguna consideración dedicada a resolver la expresada acción indemnizatoria y más aún, de su mérito no se desprende una decisión sobre la misma, lo que evidentemente, causa agravio a sus representados al dejarles en absoluta incertidumbre sobre el destino de su pretensión, según alegó el abogado de la parte demandante.

Sostuvo que se hace imperioso enmendar con arreglo a derecho la sentencia atacada, conformándola a lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 170, en relación al artículo 160 del Código de





Procedimiento Civil, resolviendo todas y no sólo algunas de las acciones deducidas, y obrando así, la acción indemnizatoria del inciso 2° del artículo 1458 del Código Civil debe ser acogida, pues concurren todos los presupuestos que la hacen procedente

Adujo que quedó acreditado en el proceso, el mentado crédito se contrató exclusivamente para el pago de parte del precio de la compraventa, de modo que la falsa compraventa sirvió al banco para beneficiarse de un millonario crédito que su representada Silva Hermanos Limitada debe cumplir hasta el año 2021, según consta del pagaré que en copia corre agregado en fojas 45 y siguientes. Además. En el juicio se postula la responsabilidad contractual que le cabe al banco demandado por los incumplimientos culpables en que incurrió en la ejecución de los contratos de mandato y deposito materia de este litigio, sin perjuicio de la acción resarcitoria de perjuicios que se ventiló también, pero amparada en el inciso 2° del artículo 1458 del Código Civil, por lo que estando entonces en el campo de ese tipo de responsabilidad, en materia probatoria, cobra aplicación el inciso 3° del artículo 1547 del Código Civil, conforme al cual la prueba de la diligencia o cuidado corresponde al que ha debido emplearla. Pese a ello, el fallo, no obstante reconocer que se está el estadio de la responsabilidad contractual, afirma que de conformidad con lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, correspondería a su parte probar los incumplimientos atribuidos al banco demandado, con lo cual, invierte la carga de la prueba, en perjuicio de su parte.

Apuntó que no puede sostenerse que el negocio o encargo sólo interese al mandatario y, por lo tanto, sea un mero consejo, que no genere obligación alguna, ni aún a pretexto de lo estipulado en la cláusula novena del contrato de compraventa e hipoteca de 28 de agosto de 2013, pues la realidad muestra que el negocio o encargo interesa tanto al banco como a Silva Hermanos Limitada, quien de cara al interés anunciado pagó al banco los respectivos servicios de tasación e informe de títulos del inmueble, tal cual declaró como testigo el ejecutivo de cuentas, don Benjamín Alarcón.



Subrayó que el contrato de mandato existió, de cuyo incumplimiento o cumplimiento imperfecto, se siguieron perjuicios para los actores, de manera que el fallo que rechaza esta afirmación debe ser revocado, haciéndose lugar a la acción de responsabilidad civil respecto del banco demandado.

Aseveró que el banco es responsable de la pérdida de los dineros que le fueron depositados por Silva Hermanos Limitada, con prescindencia de que tales dineros hayan sido retirados por un tercero valiéndose de actos delictivos y defraudatorios.

Esgrimió finalmente, que el fallo no se pronunció sobre los demás elementos de la responsabilidad demandada, ya que, la sentencia, al tener por no acreditado los incumplimientos en que se funda la demanda, consideró innecesario pronunciarse sobre los demás elementos de la responsabilidad contractual demandada.

Pidió - en síntesis- revocar el fallo de primer grado y, en su reemplazo, declarar que se acoge la demanda incoada.

**DÉCIMO:** Que, en lo atinente a los supuestos incumplimientos de los contratos de mandato y depósito por parte del banco demandado, cabe precisar que la actora no acreditó, bajo qué términos se habría conferido el citado mandato, el que resulta completamente ajeno al giro bancario del demandado, por lo que no puede ejecutarlo por sí mismo, ni menos delegar dicho cometido a un tercero.

Resulta pacífico para la doctrina y jurisprudencia que el mandato se confiere para la realización de un negocio jurídico, como celebrar un acto o contrato, administrar un comercio o una industria. En este caso, el encargo de efectuar un estudio de títulos de un inmueble o un informe de tasación del mismo no reviste el carácter de negocio jurídico, sino que material, sujeto a otros requisitos y responsabilidades. Además, el referido estudio de los títulos de dominio como el informe de tasación, el banco lo realiza exclusivamente en resguardo de sus intereses, como expresamente lo consigna la cláusula *novena* del contrato de compraventa e hipoteca autorizado en la Notaría de don Cosme Gomila Gatica, repertorio n°



9916-2013, celebrado con fecha 28 de agosto de 2013 entre Silva Hermanos Limitada, Sociedad Electrónica Balrich S.A.C. y Banco Santander-Chile, a saber y según detalla la aludida estipulación novena: *“Asimismo, el constituyente declaró conocer y aceptar que el Banco estudia e informa los títulos y antecedentes legales del inmueble que se constituye en hipoteca por el presente instrumento, sólo desde el punto de vista del banco y para resguardar sus propios intereses, siendo de exclusiva responsabilidad de las partes, el contratar, si lo estiman necesario, sus propios asesores, abogados, profesionales y técnicos que resguarden sus derechos, sin perjuicio del conocimiento que de esta estipulación tenía la parte demandante en la concurrencia de otros contratos válidamente celebrados.”*

En rigor, el banco no le interesa el contrato de compraventa en sí mismo, lo que realmente lo motiva es la celebración del contrato de mutuo y en ese contexto, el estudio de los títulos de dominio se asocia o vinculan al crédito hipotecario que a la postre es el negocio jurídico de la entidad bancaria, y es por ello, que el mayor interesado en la validez de los títulos de propiedad del inmueble objeto o cosa a que se vende es el comprador diligente.

**UNDÉCIMO:** Que en relación a un supuesto incumplimiento del contrato de depósito y con motivo del pago de los certificados de depósito, vale vistas a la Orden N° 0012135 y N° 0012153 que quedaron bajo la custodia del Notario Cosme Gatica, la demandante sostuvo que el banco, incumplió sus obligaciones de depositario, puesto que le habría pagado estos títulos de crédito a un tercero. Cabe precisar que los certificados de depósitos fueron tomados a la Orden de Silva Hermanos Ltda. y endosados en blanco por esta sociedad y cuando fueron entregados estos títulos de créditos al suplantador, el inmueble ya estaba vendido e inscrito, como asimismo inscritas las sendas hipotecas y prohibiciones de enajenar, es decir, las condiciones e instrucciones notariales estaban cumplidas y así el banco pagó los títulos de crédito al endosatario quien acreditó su derecho mediante una serie no interrumpida de endosos. En razón de



lo anterior, el Banco Santander no incumplió sus obligaciones de depositario, conforme a las normas del Código Civil, en relación con las leyes números 18.552 y 18.090, ya que efectuó el pago al legítimo tenedor de los títulos a la orden.

### III.- EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS:

**DUODÉCIMO:** Que en nada alteran o adicionan a lo resuelto, los documentos acompañados en segunda instancia por la parte demandante, a saber, el informe en derecho suscrito por el abogado Gómez Balmaceda y el certificado de pago del crédito hipotecario suscrito por el actor don Clodomiro Silva Núñez para con el Banco Santander Chile.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 186, 187, 223 y 764, 765 y 768 del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

I.- Que, **SE RECHAZA**, el recurso de casación en la forma deducido por el apoderado de los demandantes, Clodomiro Silva Núñez y la sociedad Silva Hermanos Limitada, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Décimo Juzgado Civil de esta ciudad, escrita a fojas 415 y siguientes.

II.- Que, **SE CONFIRMA** la aludida sentencia apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho pronunciada por el referido Décimo Juzgado Civil de esta ciudad, escrita a fojas 415 y siguientes

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redactó el ministro señor Aguilar

**N°Civil-14859-2018.**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis.

XXLKZVFNQC





XXLKZVFNQC

Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Elsa Barrientos G., Alejandro Aguilar B. Santiago, nueve de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a nueve de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

